

RESOLUCIÓN GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
N° 080 -2019-GRJ/GRDS.

Huancayo, 10 OCT 2019

EL GERENTE REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTOS:

El Memorándum N° 1164-2019-GRJ/ORAJ, de fecha 03 de octubre de 2019; Informe Legal N° 456-2019-GRJ/ORAJ, de fecha 02 de octubre de 2019; Memorándum N° 1402-2019-GRJ-GRDS, de fecha 25 de setiembre de 2019; Oficio N° 106-2019-GRJ-DREJ/OAJ, de fecha 20 de setiembre de 2019; Proveído N° 025-2019-GRJ-DREJ/SG, de fecha 12 de setiembre de 2019; Resolución Directoral Regional de Educación Junín N° 1873-DREJ, de fecha 05 de agosto de 2019; Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral Regional de Educación Junín N° 1873-DREJ presentada por el Sr. WILLIAMS WALDEMAR CHAVARRIA BARRIOS, de fecha 04 de setiembre de 2019; Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral Regional de Educación Junín N° 1873-DREJ presentada por el Sr. DIAZ DOMINGUEZ ESTANISLAO AQUILES, de fecha 04 de setiembre de 2019; y el Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral Regional de Educación Junín N° 1873-DREJ presentada por la Sra. LILIANA GRACIELA MONTES GAHONA, de fecha 04 de setiembre de 2019;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Memorándum N° 1402-2019-GRJ-GRDS, Oficio N° 106-2019-GRJ-DRE/OAJ, y el Proveído N° 025-2019-GRJ-DREJ/SG se cumple con remitir los Recursos de apelación presentado por los Señores WILLIAMS WALDEMAR CHAVARRIA BARRIOS; DIAZ DOMINGUEZ ESTANISLAO AQUILES; LILIANA GRACIELA MONTES GAHONA (en adelante Los Recurrentes) los mencionados Recursos de Apelación son contra la Resolución Directoral Regional de Educación Junín N° 1873-DREJ de fecha 05 de agosto del 2019;

Que, para los fines del presente caso, cabe referir que, el numeral 120.1 del Artículo 120° concordante con lo prescrito en los numerales 217.1 y 217.2 del Artículo 217° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General (**LPAG**) Ley N° 27444, establecen expresamente: Que frente a un Acto Administrativo, que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los Recursos Administrativos señalados en la Ley, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo. Solo son impugnables los actos administrativos definitivos, que ponen fin a la instancia, y los actos de trámite

GRDS	
REG. N°	3732486
EXP. N°	2511031



Gobierno Regional Junín



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al procedimiento y podrán impugnarse con el Recurso Administrativo que en su caso se interponga contra el acto definitivo. Bajo este contexto normativo se infiere que son materia de contradicción y/o impugnación administrativa los actos de trámite entre otros como es el presente caso contra la Resolución Directoral Regional de Educación N° 1873-DREJ la cual en su parte resolutive señala lo siguiente:

"Artículo 1°: DECLARAR LA NULIDAD DE OFICIO, de las Resoluciones Directorales N°s 002625, 002632, 002629 y 002638-2018-UGEL-T, de fecha 06 de diciembre de 2018, emitidos por la UGEL Tarma, sobre Reasignaciones irregulares de Profesores de II.EE a Profesores de Aula de Innovación Pedagógica – AIP, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución y de conformidad con la Opinión Legal N° 318-2019-GRJ/DREJ/OAJ, Hoja de Envío N° 2529, Reg. N° 2470-2019-COOPER.

Que, con fecha 04 de setiembre del 2019, los Recurrentes interponen recurso de apelación contra la Resolución señalada en el considerando anterior, manifestando dentro de su considerando PRIMERO de los Fundamentos de Hecho lo siguiente:

"(...) Sobre reasignaciones irregulares de profesores de II.EE a profesores de aula de AIP, sustentando su ilegal actuación en lo recomendado por el Ministerio de Educación mediante OFICIO N° 001132-2019-MINEDU/VMGP-DIGEDD, de fecha 08 de marzo del 2019, que resuelve señalar la Resolución Ministerial N° 582-2013-ED, para el presente reasignación administrativa de personal. Sin haber considerado que he sido designado mediante un proceso de reasignación claro y transparente y con los lineamientos impuesto por la UGEL-Tarma en base a la Resolución Ministerial. N° 582-2013-ED. asimismo no se ha valorado como medios probatorios los antecedentes de los mismo existentes en otros UGEL de la Región, vulnerando derechos constitucionales y los principios administrativos de la Ley N° 27444, en el que establece en su Art. IV.- **Principio de Legalidad.**- "las autoridades deben actuar con respeto a la constitución, la ley al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo a los fines para los cuales fueron conferidas. Y el **Principio de Legalidad.**- "en el procedimiento la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todos los medios probatorios necesarios autorizados por ley. (...)"

Que, luego de analizados los Recursos interpuestos por los Recurrentes no tenemos ninguna opinión en contrario con respecto al fundamento expuesto, en razón a que es evidente en que la Resolución Directoral Regional de Educación N° 1873-DREJ, no ha tenido en consideración de manera alguna los Descargos presentados previos a su emisión, los cuales son de fechas 04 de junio del presente año y de haber sido tomados en cuenta hubieran variado sustancialmente lo resuelto;

Que, para resolver los Recursos presentados debemos remitirnos al numeral 3.1 del Artículo 3 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento





Gobierno Regional Junín



Administrativo General, sobre los requisitos de validez de los actos administrativos, precisa que: *"El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico"*; y en el artículo 6°, sobre la motivación del acto administrativo, señala: **"6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado. 6.2 Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. Los informes, dictámenes o similares que sirvan de fundamento a la decisión, deben ser notificados al administrado conjuntamente con el acto administrativo."**; **"6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto. (...)";**

Que, también la resolución recurrida no ha tenido en consideración el numeral 1.2 del art. IV del Título Preliminar del TUO de la Ley de Procedimientos Administrativo General Ley N° 27444, la cual señala lo siguiente:

1.2. Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; **a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.**

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

(El subrayado y resaltado es nuestro)

Que, el procedimiento al no haber cumplido con un debido procedimiento, también incluye una falta de motivación de los actos administrativos, la cual según el Tribunal Constitucional, debe entenderse de la manera siguiente: *"El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya, es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos*





Gobierno Regional Junín



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

emanados de una potestad reglada como discrecional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo." (STC 00091-2005- PA/TC, F.J. 9, párrafo.: 3, 5 a 8. criterio reiterado en las SSTC 294-2005-PA/TC, 5514-2005- PA/TC, entre otras);



Por tanto, la motivación constituye una garantía constitucional del administrado que busca evitar la arbitrariedad de la Administración al emitir actos administrativos. En ese sentido, la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en el artículo IV del Título preliminar establece que el debido procedimiento es uno de los principios del procedimiento administrativo. En atención a este, "(...) se reconoce que Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho (...)." - exp. 04200-2011-PA/TC-HUAURA;



Que, el Derecho de Petición, está fundamentado en : El artículo 2°, inciso 20) de la Constitución Política la cual establece como derecho de toda persona aquel referido "A formular peticiones, individual o colectivamente, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad". Esta respuesta oficial, de conformidad con lo previsto en el inciso 20) del artículo 2° de la Constitución, deberá necesariamente hacerse por escrito y en el plazo que la ley establezca. Asimismo, la autoridad tiene la obligación de realizar todos aquellos actos que sean necesarios para evaluar materialmente el contenido de la petición y expresar el pronunciamiento correspondiente, el mismo que contendrá los motivos por los que se acuerda acceder o no a lo peticionado, debiendo comunicar lo resuelto al interesado o interesados. Sobre la materia debe insistirse en que es preciso que la contestación oficial sea motivada; por ende, no es admisible jurídicamente la mera puesta en conocimiento al peticionante de la decisión adoptada por el funcionario público correspondiente;

Que, en consecuencia, la acción oficial de no contestar una petición o hacerlo inmotivadamente trae como consecuencia su invalidez por violación, por omisión de un deber jurídico claro e inexcusable;

Que, la motivación de las Resoluciones Administrativas, al incidir en los derechos de los administrados, es necesaria en tanto constituye un parámetro de legalidad de la actuación administrativa y a su ausencia restringe o limita las posibilidades de su tutela. Se trata de un mecanismo de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos que garantiza la imparcialidad de la Administración, de ahí que no es una mera formalidad si no un requisito sustancial que permite al administrado conocer las razones del proceder administrativo;

Que, en definitiva, la motivación de los actos administrativos constituye una forma de democratización de la actuación administrativa en la que se le obliga a dar cuenta a la colectividad y a los interesados del fundamento de sus decisiones pues se traduce en una declaración de cuales son circunstancias de hecho y de derecho que han llevado a la respectiva administración pública al dictado o emanación de determinado acto administrativo;

Que, en el presente caso la Resolución Directoral Regional de Educación N° 1873-DREJ, no cuenta con una debida motivación esto a razón de que dentro de la misma no se ha tenido en consideración ni se ha respondido de forma alguna los Descargos presentados por Los Recurrentes, dichos descargos fueron realizados a razón de que se les ha notificado los Oficios N° 644, 646, 647-2019-GRJ/DREJ/UGEL-DIR-T, los descargos como ya lo hemos señalado antes han sido presentados en fecha 04 de junio, y sobre los mismos dentro de la Resolución apelada solo se hace mención dentro del tercer párrafo a lo siguiente:

"(...) finalmente, con Expediente N° 03428463-2019-DREJ, de fecha 19 de junio de 2019, remite los descargos de los docentes involucrados: Williams Waldemar CHAVARRIA BARRIOS, David Noé ARELLANO YARASCA, Estanislao Aquiles DIAZ DOMINGUEZ y Liliana Graciela MONTES GAHONA". Es decir se tuvo conocimiento pleno de los descargos presentados por los Recurrentes.

Que, al haber encontrado serias deficiencias con respecto a la emisión de la resolución apelada, lo que le cabría viene a ser la Nulidad de conformidad a lo establecido al inciso 1 y 2 del Artículo 10 de la Ley N° 27444, la cual señala:

Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:

1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.

Que, la declaración de Nulidad de un Acto Administrativo acarrea consigo al Responsabilidad Administrativa de quienes participen en la emisión del mismo, esto de acuerdo a lo señalado en el numeral 11.3 del Artículo 11 de la Ley N° 27444, la cual señala lo siguiente:



11.3 La resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico.

Que, teniendo en consideración que existen (03) tres recursos de apelación contra la Resolución Directoral Regional de Educación Junín N° 1873-DREJ, las cuales son i) Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral presentada por el Sr. WILLIAMS WALDEMAR CHAVARRIA BARRIOS, Exp N° 3629542. ii) Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral presentada por el Sr. DIAZ DOMINGUEZ ESTANISLAO AQUILES, Exp N° 3629523. iii) Recurso de Apelación contra la Resolución Directoral presentada por la Sra. LILIANA GRACIELA MONTES GAHONA, Exp N° 3629559. Todas ellas deben de acumularse en un solo procedimiento administrativo, por lo cual debemos remitirnos a lo señalado en el artículo 127.2 de la Ley N° 27444 la cual señala lo siguiente:

Artículo 127 Acumulación de solicitudes

Art. 127.2° Pueden acumularse en un solo escrito más de una petición siempre que se trate de asuntos conexos que permitan tramitarse y resolverse conjuntamente, pero no planteamientos subsidiarios o alternativos, salvo lo establecido en el numeral 217.4 del artículo 217.

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por los artículos 25° y 41° literal c) de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867 y modificatorias, y contando con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- SE DECLARA FUNDADO, el recurso de apelación interpuesto por los Señores WILLIAMS WALDEMAR CHAVARRIA BARRIOS; DIAZ DOMINGUEZ ESTANISLAO AQUILES; LILIANA GRACIELA MONTES GAHONA, consecuentemente **DECLARAR LA NULIDAD** de la Resolución Directoral Regional de Educación Junín N° 1873-DREJ de fecha 05 de agosto del 2019, según los considerandos expuestos.

ARTICULO SEGUNDO.- RETROTRAER, el procedimiento administrativo hasta el momento que la Dirección Regional de Educación Junín, emita un nuevo acto administrativo resolviendo y teniendo en consideración los descargos presentados por los Señores: WILLIAMS WALDEMAR CHAVARRIA BARRIOS; DIAZ DOMINGUEZ ESTANISLAO AQUILES; LILIANA GRACIELA MONTES GAHONA, sustentado su decisión de acuerdo al marco jurídico vigente, valorando correctamente los documentos obrantes en el expediente administrativo y adecuando correctamente las normas aplicables al caso concreto.

ARTICULO TERCERO.- REMITIR, copias de los actuados al Secretario Técnico de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Dirección Regional de Educación Junín, para el deslinde de Responsabilidades del



Gobierno Regional Junín



Trabajando con la fuerza del pueblo!

funcionario y/o servidor que resulte responsable por la emisión de la Resolución Directoral Regional de Educación Junín N° 1873-DREJ.



ARTICULO CUARTO.- ACUMULAR, los Recursos planteados por los recurrentes signados con los siguientes Números Exp N° 3629542. Exp N° 3629523 Exp N° 3629559 en uno principal el cual vendría a ser el N° 2511031.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR, a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín y a la interesada.

ARTICULO SEXTO.- DEVUÉLVASE, el expediente administrativo a la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional Junín, a fin de mantener un expediente único en cumplimiento al Artículo 161° del TUO de la Ley N° 27444.

REGISTRE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Lic. CLEVER RICARDO UNTIVEROS LAZO
Gerencia Regional de Desarrollo Social

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO.

10 OCT 2019

B/Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL

